

Revista chilena de historia social popular

REVUELTAS

SANTIAGO, CHILE | NÚCLEO DE HISTORIA SOCIAL POPULAR
AÑO 05 | NÚMERO 10 | DICIEMBRE 2024 | ISSN 2452-5707

DOSSIER

La clase en la calle. Conflictividad docente en la crisis del 2001 en Entre Ríos (Argentina)

The class in the Street. Teachers conflictivity in the 2001 crisis in Entre Ríos (Argentina)

Alejo Mayor

Licenciado en Sociología
Universidad de Buenos Aires.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET).
Paraná, Entre Ríos

alejomayor.1984@gmail.com.

 [0000-0003-2914-1651](https://orcid.org/0000-0003-2914-1651)

Recibido: 15 de septiembre 2024

Aceptado: 18 de noviembre 2024

Resumen: El artículo se propone describir la dinámica del conflicto de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos (Argentina) durante la crisis orgánica de 2001. En esta primera aproximación, el énfasis estará en la reconstrucción histórica del proceso, para poder analizar las formas de lucha y organización que se dieron los trabajadores de la educación, el contenido de sus reclamos y el modo en que establecieron alianzas y coordinaron acciones con otros sectores. Para ello, se utilizarán fuentes hemerográficas (El Diario y la revista gremial Presencia) y testimonios de entrevistas en profundidad a actores clave, a modo de complementar la información. El abordaje tendrá un enfoque cualitativo.

Palabras clave: Docentes, conflicto social, crisis de 2001, Entre Ríos

Abstract: The article aims to describe the conflictive dynamics of education workers from Entre Ríos (Argentina) during the organic crisis of 2001. In this first approach the emphasis will be on the historical reconstruction of the process, in order to analyze the forms of struggle and organization that the education workers gave to him, the content of their claims and the way in which they established alliances and coordinated actions with others sectors. For this purpose, will be used periodicalsources (El Diario and the unión journal Presencia) and testimonies from in-depth interviews with key actors to complement the information. The approach will have a qualitative focusing.

Key words: teachers, social conflict, crisis of 2001, Entre Ríos

Introducción

La crisis orgánica (Gramsci, 2003) de 2001 implicó una conmoción en la totalidad del cuerpo social argentino en la cual se agudizaron los conflictos y la movilización de todos los sectores sociales que vieron afectadas sus condiciones de vida y su reproducción social. En todo el país, las clases sociales y fracciones de clases, sea sectorialmente con sus intereses económico-corporativos como horizonte o constituidas en fuerzas sociales a partir de alianzas sociales, se dispusieron a la lucha durante un año pleno de conflictos que, al calor de la profundización de la crisis, encontró su pico en las jornadas rebeldes de diciembre. Los docentes entrerrianos, tanto con sus organizaciones sindicales como de manera autoconvocada, no fueron ajenos a este proceso. La fuerza social que se fue constituyendo en el rechazo a las llamadas políticas neoliberales y en el enfrentamiento contra los cuadros políticos del régimen, las empresas privatizadas, los organismos internacionales de crédito y los bancos (en tanto personificaciones del capital financiero) fue de carácter capitalista. Sin oponerse al esquema general de la dominación, se orientó en pos de la salida del modelo de acumulación vigente (la convertibilidad), y por la imposición de un nuevo modelo económico de carácter mercadointernista, que revirtiera las políticas de desindustrialización fomentadas por las medidas de apertura económica y con mayor autonomía de los organismos internacionales de crédito¹.

Las fuerzas sociales son heterogéneas y los intereses que la conforman son contradictorios (y hasta pueden ser antagónicos), por lo que no están exentas de disputas a su interior por la conducción. Las fracciones de clase que hegemonizaron esta alianza fueron los sectores de la burguesía industrial y rural (y sus personificaciones políticas) que pugnaban por la salida de la convertibilidad vía devaluación. Lo que unificó a docentes y otras fracciones de la clase trabajadora ocupada y desocupada, con comerciantes, productores agropecuarios y cuadros políticos de la burguesía fue el enfrentamiento al denominado “modelo neoliberal”, que ponía en jaque la reproducción social y la realización plena de los intereses de los distintos componentes de la fuerza social. En agosto de 2000, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) sostenía que era “im-

¹ María Celia Cotarelo (2016) sostiene que en este momento (2001) se estaba gestando una fuerza social (que se realizaría a partir de 2003) de carácter *popular* (por contener el interés de los excluidos del poder político —el pueblo—), *democrático* (dada la lucha contra la opresión vigente y la búsqueda de las clases subalternas por influir en los asuntos públicos) y *nacional* (por la búsqueda de control territorial a partir de la capacidad de acción del Estado-Nación en disputa con el capital transnacional) (p. XXV). Asimismo, aclara que la caracterización de la fuerza como popular no implica que sea el pueblo quien la conduzca, sino que por el contrario son las fracciones burguesas que la integran quienes ejercen la conducción.

prescindible para toda la Argentina un cambio de rumbo de las políticas socioeconómicas” y que la lucha por este cambio debía llevarla a cabo una “alianza social [que] se consolida día a día” (Presencia N° 77, agosto de 2000, p.2).

A nivel nacional, la conflictividad docente que detonó en 2001 tuvo sus antecedentes en un proceso desarrollado la década anterior, en la cual las reformas neoliberales afectaron profundamente al sector. Durante los noventa se operaron reformas en clave tecnocrática que contribuyeron a afianzar la descentralización administrativa, la diversificación y segmentación del sistema educativo bajo nuevas formas de regulación y control por parte del Estado (Jaimovich et. al., 2004). En esos años se aprobaron muchas leyes que propiciaron importantes cambios (políticos, económicos y pedagógicos) en materia educativa y en las condiciones laborales de los docentes². En este último sentido, la depreciación del salario (empobrecimiento), intensificación del trabajo y precarización laboral (necesidad de mayor carga horaria, supresión de derechos, etc.) proceso enmarcado en políticas de desfinanciamiento, desregulación (e incluso riesgo de quiebra) de obras sociales e instituciones de seguridad social provinciales (Carrizo, 2012).

Estas medidas generaron procesos de resistencia de los trabajadores de la educación, tanto mediante los sindicatos docentes como en colectivos de autoconvocados (Migliavacca, 2011). Sin dudas, el hito de este proceso de lucha en el cual se fortaleció el grado de unidad docente fue la Carpa Blanca (1997-1999):

Salimos del esquema de la dicotomía radicales y peronistas (...) te tocan el centro tuyo. Nos tocaron la educación, nos tocaron las leyes, entonces eso unificó. Desde ese punto de vista, no podemos decir que haya sido malo porque la reacción nuestra fue unificarnos para afrontar eso y bueno (...) aparecieron acciones que terminan (...) con la acción de la Carpa Blanca que (...) activó enormemente la participación, porque no solamente eran los ayunantes, sino que también se hacía ayuno en las escuelas. (...) hicimos todas las acciones habidas y por haber. (Entrevista a Beatriz Montaldo, 24/10/19)

El triunfo de la Alianza recibió el apoyo inicial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y otros gremios docentes, en gran parte, debido a la sanción de parte del nuevo gobierno de un im-

² Algunas de estas leyes fueron: la Ley N° 24.049 de Transferencia de Servicios Educativos de Nivel Medio y Superior No Universitario (sancionada en 1991 y promulgada en 1992); Ley N° 24.195 Federal de Educación (1993) que abarcó todo el sistema educativo; y el Pacto Federal Educativo (suscripto en 1994 y luego Ley N° 24.856 en 1997) que posibilitó la implementación federal de las anteriores. También, se puede mencionar la Ley N° 24.521 de Educación Superior (1995) que plasmó la lógica de mercado en el sistema universitario.

puesto que permitió el financiamiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Sin embargo, pronto el nuevo gobierno mostraría los evidentes lazos de continuidad con su antecesor. A poco de cumplirse un año del nuevo gobierno, desde Agmer sostenían que “[el] disloque entre la promesa electoral y la realidad tienen su perfecta explicación en la decisión política de profundizar la política menemista a costa de una ruptura, que parece definitiva, del contrato electoral del 99” (Presencia N° 79, noviembre de 2000, p.3).

Cediendo a las presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el gobierno de la Alianza planteó un segundo Pacto Federal Educativo. El mismo profundizaba la descentralización y recortaba la responsabilidad estatal sobre la educación pública por lo que promovía escuelas “autónomas y autogestionadas”. Esta política mercantilizadora, además de arremeter contra derechos y estatutos docentes, pretendía convertir cada escuela en una pequeña empresa en la cual las relaciones laborales fueran reguladas por un ente autónomo (Saforcada, 2012). Los conflictos docentes, en este escenario de crisis de la convertibilidad del cambio de siglo, volvieron a recrudecer.

En este trabajo me propongo describir y explicar la dinámica conflictiva de los docentes entrerrianos durante la crisis orgánica de 2001. ¿Cuáles fueron las formas de lucha y organización que se dieron los trabajadores de la educación? ¿Cuál fue el contenido de sus reclamos? ¿Con cuáles sectores y de qué modo establecieron alianzas y coordinaron acciones? A su vez, las teorías de los recursos de poder sindical (Schmalz, 2018, Lévesque y Murray, 2011) pueden ofrecer elementos para pensar la movilización colectiva docente y el modo en que estos defendieron estos intereses.

En esta primera aproximación, desde un enfoque cualitativo, resulta útil el método narrativo-histórico, que consiste en “la reconstrucción de sucesos históricos que son narrativamente descritos e hilvanados alrededor de un proceso” (Sautú, 2011, p.222). Para ello, se utilizan dos fuentes hemerográficas (El Diario y la revista sindical de Agmer Presencia) lo cual se complementa con testimonios orales provenientes de entrevistas en profundidad a actores clave. Estos últimos, para poder recuperar la voz y la perspectiva de los actores, con los recaudos que implica el trabajo con las memorias, sus potencias y limitaciones, propios de la historia oral.

La conflictividad docente en Entre Ríos en los primeros meses de 2001

La Agmer, principal sindicato docente de la provincia³, comenzó el año con cuestionamientos al descuento de días de huelga a los trabajadores de la educación en montos que iban de 20 a 140 pesos, por el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), CGT disidente⁴ y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) del 23 y 24 de noviembre del año 2000, el cual tuvo un gran acatamiento y fue una “respuesta contundente del rechazo popular a la política de ajuste y desocupación a que nos está condenando este gobierno” (*Presencia* N° 79, noviembre de 2000, p.3). Denunciaron que el gobierno, de esta manera, atacaba el derecho a huelga. La titular de Agmer, Beatriz Montaldo sostuvo que inclusive “el actual gobierno descontó sin compasión y en forma arbitraria los feriados del 25 de mayo y el 9 de julio, a fin de afectar el presentismo de los docentes”. A su vez, en relación a la interna provincial remarcó que “el gobierno de (Sergio) Montiel y el de (Jorge) Busti tomaron las mismas medidas antidemocráticas con respecto a los docentes” (El Diario, 12 de enero de 2001, p.10).

En pleno receso escolar, cuando promediaba enero, unos 40.000 chicos y chicas en la provincia continuaban asistiendo a las escuelas para concurrir al comedor escolar. En muchos casos, allí recibían el único plato del día hasta el mediodía siguiente (El Diario, 24 de enero de 2001, p.6).

Los trabajadores de la Escuela Hogar de Paraná, agremiados en ATE, se movilizaron hacia el Consejo General de Educación (CGE) en protesta por la propuesta de “reordenamiento” interno que redundaría en reducción de cargos. Los do-

³ La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se empezó a gestar en 1981 a partir de la confluencia de sindicatos docentes precedentes y termina de concretarse a nivel provincial un par de años después con la primera comisión directiva provisoria. Aun así, recién en 1988, con la unificación con el Centro Entrerriano de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedemys) se terminaría de consolidar el proceso de formación (Tálamo y Rozados, 2017). Para indagar sobre el sindicalismo docente previo a la conformación de Agmer ver Tálamo, Rozados y De Rosa (2019) y Catelotti y Medina (2019).

⁴ En febrero de 1994, se conformó el Movimiento de Trabajadores Argentinos, una corriente crítica al interior de la CGT compuesta por más de 15 sindicatos a nivel nacional e impulsada por Camioneros y la Unión de Tranviarios Automotores (UTA). Sus máximos referentes fueron Hugo Moyano (Camioneros) y Juan Manuel Palacios (UTA). En marzo del 2000, en el contexto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de la Alianza (que implicaba una profundización de las políticas de flexibilización laboral adoptadas durante la década anterior), se produjo la ruptura definitiva de los gremios del MTA con la CGT, a los que se le sumarían el SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina); quienes dieron vida a la CGT disidente, conocida como CGT-Moyano. Para apreciar este proceso en detalle ver Iñigo Carrera y Donaire, 2002.

centes participaron de esta lucha, al respecto, una delegada gremial de la escuela declaró:

Habíamos conseguido nuestra unidad, que fue histórica dentro de la institución, por lo tanto, teníamos un trabajo no de defensa corporativa, sino de crecimiento en lo pedagógico, en lo cognitivo, en encontrar estrategias diferentes para trabajar, en defender cada uno de los cursos cuando había intentos de cerrarnos porque según los criterios del mercado faltaba matrícula y según nosotros era una necesidad para una institución como la nuestra; organizamos hasta un proyecto pedagógico especial para la escuela 51 (...)perdimos la apuesta y nos ganaron los cambios del organigrama de la escuela Hogar (...) que llevó a que compañeros quedaran sin trabajo. (Entrevista a Mabel Masutti, 29/6/21)

Desde Agmer, reunidos en Congreso Provincial el 24 de febrero, reclamaron urgentes definiciones en torno al pago del incentivo docente, así como de su “blanqueamiento”⁵. A la vez que se resolvió incluir en el plan de acción la realización de asambleas públicas en cada ciudad el 5 de marzo (inicio del ciclo lectivo) para dar a conocer los resultados de la encuesta nacional de la Ctera sobre la realidad docente: la conducción provincial lo hizo a las 19 horas en plaza 1° de Mayo, ciudad de Paraná, la capital provincial, el día del inicio del ciclo lectivo.

En Concordia, Agmer convocó a una concentración en la plaza 25 de Mayo para movilizarse desde allí a la Dirección Departamental de Educación y entregar un petitorio en el que se exigía la restitución en sus cargos del rector y la secretaria administrativa del Profesorado de Ciencias Sociales, Mario Leiker y Lidia Carbabelos. Los mismos fueron removidos de sus cargos por directiva del Consejo General de Educación (CGE). Se aducía falta de rendición de cuentas desde 1996. Al respecto, un docente de la institución explica:

El gobierno de Montiel, en un intento de disciplinar a esa comunidad educativa, decide una insólita y arbitraria intervención al separar al entonces rector del Profesorado y al poner en su lugar una persona nombrada “a dedo” por el CGE, una medida sin precedentes en democracia, al menos en el Nivel superior (Entrevista a Juan Menoni, 31/1/24).

Desde la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), por su parte, se movilizaron el miércoles 7 de marzo desde la sede gremial hasta la Casa de Gobierno, donde entregaron un petitorio en repudio a la Resolución 312 del CGE que disponía el cese de cargos de todos los suplentes de término fijo e idó-

⁵ “El incentivo no puede perderse, debe ser parte del salario y pasado los cinco años de su duración debe incorporarse definitivamente a nuestros sueldos.” (Presencia N° 80, marzo de 2000, p.4)

neos, lo que ponía en incertidumbre los puestos de trabajo de entre 2.500 y 3.000 trabajadores (El Diario, 6 de marzo de 2001, p.9). La mesa directiva de la CGT-Mo-yano brindó su apoyo a la movilización (El Diario, 8 de marzo de 2001, p.7).

A mediados del mes de marzo, tras el anuncio del ajuste del ministro de Economía López Murphy, la Ctera anunció un paro de 48 horas, al que adhirió Agmer. Posteriormente, la CTA y la CGT disidente también convocaron al paro, coincidiendo ambos, por lo que adoptó el carácter de paro general. Asimismo, se convocaron asambleas para determinar los pasos a seguir. Sin embargo, la magnitud de la reacción de resistencia al ajuste anunciado forzó a López Murphy a renunciar el 19 de marzo, lo que desembocó en la asunción de Cavallo en la cartera de Economía. El gobernador Sergio Montiel, así como había tomado distancia de las medidas de López Murphy, también declaró su insatisfacción ante la asunción de Cavallo. Aun así, se mantuvo el paro de 48 horas. De acuerdo a Agmer, “el acatamiento mayoritario [del paro] fue un claro acompañamiento a la condena no solo del plan económico de López Murphy, sino una vez más al modelo económico social vigente” (Presencia N° 81, abril de 2000, p.3).

Todos los gremios docentes en la provincia adhirieron al paro nacional: Agmer, AMET, UDA, Sadop y docentes y estudiantes universitarios (AGDU y FUER). Desde distintos lugares de concentración se movilizó hacia Casa de Gobierno: mientras los gremios de la CTA lo hicieron desde la sede de Agmer, los de la CGT disidente lo hicieron desde la de AMET. Inclusive, adhirió en la provincia la CGT Entre Ríos a pesar de estar bajo la órbita de la CGT oficial que no convocó.

El primer día de paro docente (20/3) tuvo un fuerte acatamiento de entre 70 y 90% en la provincia, aunque en Paraná el ausentismo fue de apenas 31%. En ciudades como Gualaguay y Villaguay tuvo picos de más de 90%. Desde Agmer señalaron que dicho número se debía al temor por los descuentos (El Diario, 21 de marzo de 2001, p.9). El segundo día registró números similares. Agmer y UTA fueron los dos gremios con mayor acatamiento en la provincia. Beatriz Montaldo, una de las oradoras del acto de la movilización, volvió a insistir sobre la continuidad de las políticas del gobierno aliancista con las de su predecesor (El Diario, 22 de marzo de 2001, p.9).

A comienzos de abril, el gobernador Montiel, mediante el Decreto 726, derogó la promoción de la Semana de la Memoria que, desde el año 1997, se desarrollaba en los establecimientos educativos entre el 24 y el 31 de marzo, con un argumento que apelaba a “La necesidad de colaborar en los procesos de pacificación del país” (El Diario, 7 de abril de 2001, p.9). Desde Agmer cuestionaron la decisión y sostuvieron que “para nada alcanzaremos la ‘pacificación’ de nuestro país, si se

sigue instalando un modelo de exclusión social que solo genera desocupación, miseria y violencia social” (Presencia N° 81, abril de 2001).

El 1° de Mayo, Agmer participó junto a otros sectores⁶ del acto por el Día del Trabajador convocado por la CTA Paraná y el centro de estudiantes de la escuela de nivel medio Bazán y Bustos, en la plaza del barrio San Agustín. Allí se recordó a los mártires de Chicago, pero también a los caídos en la lucha contra el “modelo neoconservador”; asimismo, se pidió por la libertad de Emilio Alí, preso por pedir alimentos en Mar del Plata. El lugar escogido se justificó por la “integración con los barrios, ya que, si bien son los trabajadores los homenajeados, ya no hay fábricas, es en los barrios donde están los que trabajan, los desocupados, los estudiantes” (El Diario, 30 de abril de 2001, p.9), en consonancia con el lema de la CTA “de la fábrica al barrio”. Allí, Beatriz Montaldo aprovechó para anunciar el lanzamiento de una consulta popular para establecer un seguro de desempleo en el país (El Diario, 2 de mayo de 2001, p.9).

Otro frente de conflicto de Agmer con el gobierno provincial fue por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Esta universidad, dependiente del gobierno provincial, había sido creada el 8 de junio del año 2000, mediante la Ley Provincial N° 9.250, a partir de la transferencia de institutos de formación docente y educación superior, cuyos docentes se encontraban bajo la órbita representativa de Agmer. En su XCVII Congreso Extraordinario de febrero, el sindicato docente resolvió “denunciar la improvisación con la que se avanza en la implementación de la Uader y la ausencia de una normativa clara que contemple los derechos de docentes y alumnos” y “exigir la participación gremial en la elaboración de la normativa transitoria que regule el funcionamiento de la Uader” (Presencia N° 80, marzo de 2001, p.7). Preocupaba la falta de garantías acerca de cuestiones esenciales a su funcionamiento, como la validez nacional de los títulos o la titularización de los docentes transferidos, quienes “ingresan a la universidad con una situación laboral devaluada” (Presencia N° 80, marzo de 2001, p.7). Frente al dictamen desfavorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), el gremio docente se reunió con el Ministro de Educación de Nación, Andrés Delich, a un día del inicio de clases anunciado por el gobierno y las autoridades de la nueva universidad y señaló que desde el ministerio se desconocía “la falta de garantías” con que la nueva institución se disponía a inaugurar el nuevo ciclo lectivo, así como el hecho de que se trataba de la transferencia de institutos de educación superior preexistentes (El Diario, 6 de mayo de 2001, p.8). A pesar de no depender de Nación, la conducción de Agmer

6 También participaron de la convocatoria ATE, CGT disidente, Asamblea Ciudadana, la vecinal del barrio El Sol, el Centro de Jubilados y Pensionados del barrio San Agustín y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

buscaba, de esta manera, obtener apoyos de autoridad sobre el ámbito educativo para dar cuenta de las irregularidades y unilateralidad con la que la novel Universidad daba sus primeros pasos. Sin embargo, el rechazo al proyecto de la Uader no fue unánime en el gremio, ya que desde la seccional Paraná, conducida por la lista Verde “Memoria y Lucha” (opositora a la conducción Celeste), la posición fue otra:

En la seccional, nosotros discutimos el proceso y nos parecía (...) un buen paso que haya una universidad para los trabajadores en Entre Ríos, (...) para los sectores que no se podían ir a estudiar a otras provincias, para los sectores de la ciudad que pudieran tener carreras de grado en Entre Ríos. En general, nosotros podemos decir que desde la seccional Paraná apoyamos la creación de la Uader. Sin tener nada que ver vinculado con Montiel, ¿no? pero sí con el hecho político de la Uader (Entrevista a Cesar Baudino, 28/12/24).

También en mayo hubo tensiones entre Agmer y el gobierno por el acto oficial del 25 de mayo, debido a que el gobierno dispuso la obligatoriedad de los docentes a concurrir al mismo el día feriado, so pena de descuento por inasistencia.

En el marco de una “campana nacional contra el ajuste y en defensa de la escuela pública” (El Diario, 31 de mayo de 2001, p.9) Agmer se plegó al paro de Ctera en reclamo del pago del incentivo docente, el 8 de junio, en el contexto del paro convocado por la CGT disidente y la CTA. Desde “Tribuna Docente”, agrupación de oposición a la conducción gremial ligada al Partido Obrero, se alertó, a las centrales sindicales docentes, sobre el contenido de un borrador del ministro Delich que sería violatorio del estatuto docente provincial, y se propuso lanzar una huelga de 72 horas por aumento salarial, la triplicación del presupuesto educativo y la anulación de la reforma educativa (El Diario, 31 de mayo de 2001, p.9). El Diario consignó una “escasa adhesión”, con mayor incidencia en educación (60%) y transporte (El Diario, 9 de junio de 2001, p.9). El ministro de Gobierno Carbó anunció descuentos para quiénes se adhirieron al paro.

El 28 de junio, hubo un nuevo paro de Ctera: la adhesión en la provincia fue del 75% para los gremios y 40% para el gobierno. En la universidad la repercusión fue dispar: en tanto Trabajo Social no tuvo actividades, en Bioingeniería las tareas se desarrollaron con normalidad. El reclamo se centró en la defensa de la educación pública, ante los reiterados atrasos en el pago del incentivo y ante cualquier intento de modificación de los estatutos (El Diario, 29 de junio de 2001, p.11). El paro coronó con una multitudinaria “Marcha de las banderas” en la ciudad de Buenos Aires, en la que participó una columna de 300 docentes entrerrianos, de todos los departamentos de la provincia (Presencia N° 83, junio/julio

de 2001, p.4). A principios de julio, frente a la promulgación de una ley provincial que estipulaba que las fechas patrias 25 de mayo, 20 de junio y 9 de julio se iban a celebrar en su fecha, Agmer reclamó una compensación económica por deber trabajar un feriado (El Diario, 6 de julio de 2001, p.10). Caso contrario, señalaron que se trataría de una discriminación porque solo serían los trabajadores de la educación los obligados a trabajar en un día no laborable.

La resistencia contra el “déficit cero” y la implementación de los bonos en la provincia

Los docentes de la seccional Paraná de Agmer volvieron a movilizarse por la falta de pago del salario, aguinaldo e incentivo docente y no descartaron volver a reinstalar la Carpa Blanca (El Diario, 12 de julio de 2001, p.6). Tras declararse en estado de alerta y movilización, dispusieron concentrarse todos los días al mediodía frente a la sede de la seccional y de allí marchar hacia Casa de Gobierno hasta tanto se liquidara lo adeudado. Asimismo, se anunció una concentración en la localidad de Oro Verde y una protesta sobre la Ruta 11 para explicar a la población los motivos de la medida de fuerza. A los docentes que debían viajar para trabajar se les recomendó que presentaran el telegrama obrero⁷.

También protestaron los docentes de AMET: en estado de alerta y asamblea permanente con retención de servicios en los últimos módulos (El Diario, 12 de julio de 2001, p.6).

Al día siguiente, Agmer realizó un paro de dos horas por turno con movilización a casa de gobierno, al reclamo por los pagos atrasados se sumó el rechazo a las medidas de ajuste denominadas “déficit cero” que “va a salir del ajuste a los trabajadores” según declaró Montaldo. En dicha jornada, también, hubo retenciones de servicio de judiciales y asambleas de estatales. En referencia al “déficit cero”, el séptimo plan de ajuste del gobierno de la Alianza, esta vez lanzado por el “superministro” Cavallo, desde Agmer sostuvieron que “pese a los brotes federalistas y a los intentos de diferenciar políticas, Montiel ha elegido también el camino del ajuste” y que era “imprescindible la unidad del campo popular con todos los sectores sindicales, sociales y políticos, para establecer alternativas posibles” (Presencia, junio/julio de 2001, p.2).

Celomar Argachá, el titular del CGE, cuestionó las medidas de fuerza y señaló que se harían descuentos por lo no trabajado (El Diario, 14 de julio de 2001, p.6).

⁷ El telegrama obrero es un recurso legal que, dirigido al Consejo General de Educación (CGE), informa sobre la imposibilidad económica de dirigirse a la institución escolar donde se cumplen funciones, por lo cual el docente debe cumplir horarios en la escuela más próxima a su domicilio.

Las acciones contra las medidas del “déficit cero”, coordinadas por la Multisectorial, fueron permanentes en el segundo semestre del año. La “Asamblea en defensa de Entre Ríos y su Pueblo”, conocida popularmente como la Multisectorial, estaba conformada por ATE, Agmer, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Federación de Estudiantes Universitarios de Entre Ríos (FUER), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, colegios profesionales, sectores eclesiales, etc.

Durante el receso de julio, docentes de Agmer y UDA acompañaron simbólicamente el paro de estatales contra los ajustes del gobierno nacional y provincial. Hacia fines de julio, el gobierno provincial dio a conocer que el medio aguinaldo se pagaría en seis cuotas. Ante eso, Agmer publicó una solicitada en la que criticaba las medidas de ajuste por “hacerle pagar los platos rotos a los trabajadores”, al pagar el aguinaldo en cuotas, al prorrogar hasta el 27 de cada mes el pago de los salarios, al emitir bonos y al establecer la jubilación anticipada y el retiro voluntario. En cambio, señalaron que “ni por causalidad” se le ocurría eliminar el “aumentazo” a sus funcionarios en el inicio de la gestión ni reducir la remuneración de legisladores, eliminar la renta vitalicia de los magistrados judiciales, rever el gasto en “proyectos faraónicos”, ni cancelar contratos de asesores y eliminar cargos innecesarios en las nuevas estructuras políticas. Por consiguiente, anunciaron la realización de asambleas para definir un plan de lucha de cara al congreso de la entidad: “Que el ajuste lo hagan los que más tienen”, planteaban en la solicitada (El Diario, 30 de julio de 2001, p.7).

En Chajarí, en el norte provincial, se instaló una carpa docente en el centro de la ciudad para manifestar el descontento ante los reiterados retrasos en el pago de haberes, rechazar el pago en bonos y la reforma del Estatuto Docente. También reclamaban el pago del incentivo docente y del aguinaldo sin fraccionamiento (El Diario, 1 de agosto de 2001, p. 8). De acuerdo a José Luis Panozzo, titular de Agmer Federación, la decisión no fue del sindicato, sino de los docentes, a pesar de contar con el respaldo gremial. La modalidad, más allá de retomar la tradición de la Carpa Blanca, venía a sumarse a la otra carpa que se había instalado a instancias de la pequeños y medianos productores (principalmente citricultores) y con el apoyo de la Federación Agraria⁸.

A principios de agosto, Agmer en congreso resolvió un plan de lucha con movilizaciones a contraturno en las distintas seccionales, preparatorias para el paro nacional decretado por Ctera, en contra de las medidas de ajuste del gobier-

⁸ Para profundizar en este proceso, ver Mayor, A. (2023)

no nacional. También dispusieron la realización de asambleas en los lugares de trabajo y, desde el 13 de agosto, una hora de retención de servicios con posterior movilización a Casa de Gobierno. De no hacerse efectivo el pago de los salarios, la retención pasaría a ser de dos horas los lunes, martes y miércoles (El Diario, 5 de agosto de 2001, p.8).

Desde UDA también se rechazó el ajuste, al que consideraron “un saqueo a los bolsillos del pueblo trabajador y una injusticia nunca vista en la historia argentina” y se declaró el estado de asamblea permanente (El Diario, 5 de agosto de 2001, p.9). En AMET también debatían medidas de acción a seguir.

La semana de lucha de Agmer contra todo ajuste en salarios docentes, el pago en bonos, el fraccionamiento del aguinaldo y los atrasos en pagos, comenzó con el repudio a la “presencia intimidatoria de los agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad en los sindicatos, en las escuelas y en las movilizaciones docentes que tratan de amedrentar la firme convicción de lucha de los trabajadores de la educación” (El Diario, 6 de agosto, de 2001, p.9) y con la exigencia del cumplimiento en las partidas para los comedores escolares. Se cumplieron las 48 horas de movilización y paro nacional de la CTA, ratificados en la provincia por la Multisectorial, contra el “déficit cero”, por la libertad de los militantes sociales detenidos y, a nivel local, por la eliminación del pago en cuotas del aguinaldo, entre otras peticiones (El Diario, 7 de agosto de 2001, p.8).

A mediados de mes, la Multisectorial completó su segunda jornada de protesta con una movilización que recorrió varios barrios de Paraná. Partieron del populoso barrio San Agustín para terminar, dos horas y media después, en la plaza 1º de Mayo. El plan de lucha continuó con asambleas en reparticiones públicas promovidas por los delegados de ATE y Agmer, concentración por la mañana para marchar estatales y docentes a Casa de Gobierno en reclamo de los pagos adeudados, una volanteada y olla popular en el acceso al túnel subfluvial.

Los docentes de Agmer marcharon hacia Casa de Gobierno para reclamar el pago en término de los salarios y del medio aguinaldo y en rechazo al “déficit cero” y al pago en bonos. Se concentraron en la sede sindical para luego marchar a Casa de Gobierno, donde realizaron un acto en el que confluyeron con representantes de ATE y CTA. De acuerdo al delegado Borgetto, se movilizarían todos los días hasta que estuviesen los pagos, así como se continuaba con la retención de una hora por turno y estaba planteada para la siguiente semana la retención de dos horas sin dictado de clases (El Diario, 16 de agosto de 2001, p.9).

El plan de lucha docente continuó durante todo el mes. Ctera decretó un paro nacional para el día 22 de agosto: contó con la adhesión de UDA y AMET.

En Entre Ríos, además, hubo retención de servicios de dos horas durante toda la semana: a las demandas salariales se sumó la oposición al Decreto 2.941 que ilegalizaba las protestas de los estatales (El Diario, 22 de agosto de 2001, p.9). El paro (que tuvo un 75% de acatamiento en Entre Ríos) incluyó una movilización de 3.000 personas a la Casa de Gobierno provincial en la “Marcha por la Educación y el Trabajo”, realizada en el marco de la convocatoria en la que a nivel nacional confluyeron Ctera, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun), la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). “Vamos a resistir al gobernador todas las medidas que tengan que ver con un cercenamiento de derechos”, declaró Beatriz Montaldo, principal oradora del acto (El Diario, 23 agosto de 2001, p.9). En el acto también participaron delegaciones del interior, productores de Chajarí y estudiantes universitarios. En el CGE, el titular Argachá ordenó cerrar las puertas para impedir que los trabajadores participaran de la manifestación, por lo que se pegaron algunos carteles de protesta desde adentro, muchos que apelaban al humor: “No me fui de casa, mi amor. Argachá no me deja salir” o “Unidad Penal CGE”.

La última semana de agosto, los docentes continuaron con la retención de servicios de dos horas por turno. A su vez, hubo movilización el 28, asambleas radiales el 29, y movilizaciones el 30 y 31. Sobre el Decreto 2.941, “el gremio ya inició acciones legales contra ese decreto, pero en forma paralela hubo una respuesta contundente de los compañeros de seguir sumándose a las medidas de fuerza. Un ejemplo fue el paro del miércoles”, declaraba Adela Ramírez, titular de la seccional Paraná (El Diario, 27 de agosto de 2001, p.6).

En Santa Elena unos 200 docentes realizaron un corte de ruta en el acceso de la ciudad y la intersección con la Ruta Nacional 12. De acuerdo al secretario local de Agmer, Carlos Luis Genre-Bert, la medida fue por la falta de pago de haberes del 60% de los docentes de escuelas públicas y de gestión privada (El Diario, 1 de septiembre de 2001, p.9). Este reclamo se produjo en una ciudad tremendamente castigada por la recesión y la desocupación, y simultáneamente a la protesta de municipales que se encontraban reclamando el pago de sus haberes de julio. La falta de partidas provinciales se extendió a la situación de los comedores escolares, claves en Santa Elena para sostener la alimentación de miles de niños. El corte fue parcial: 15 minutos por mano. A su vez, se repartieron volantes a los automovilistas.

En septiembre se agudizó el conflicto en las escuelas privadas. En Gualeguay, se realizó un abrazo simbólico al Colegio San José en reclamo de los pagos atrasados. Participaron unas 300 personas, entre alumnos, docentes y padres (El Diario, 4 de septiembre de 2001, p.9). En Paraná, en tanto, se realizó una manifestación

de las escuelas privadas frente a la Catedral. “Nos han tocado los bolsillos, y se ha provocado en nosotros una angustia, un miedo, que es lo que estamos viviendo, y por lo cual estamos gritando” dijo el presbítero Gabriel Batello (presidente de la Asociación de Apoderados Legales) (*El Diario*, 5 de septiembre de 2001, p.9). Reclamaron al gobierno provincial los fondos para abonar los salarios correspondientes a julio y agosto. “La situación es gravísima” sostuvo Jorge Broggi, el titular de la seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y agregó que se iban a movilizar una vez por semana en cada localidad hasta la regularización de los pagos. La protesta llegó incluso al Delta, donde las hermanas de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo junto a docentes de una escuela isleña en la localidad de Las Cuevas (departamento de Diamante) resolvieron reunirse en asamblea frente a esta situación y emitieron un comunicado (*El Diario*, 5 de septiembre de 2001, p.9).

Durante el mes de septiembre siguieron las movilizaciones de la multisectorial en contra del “déficit cero”, del atraso salarial y los bonos. Para el Día del Maestro, Agmer había proyectado realizar una olla popular frente a Casa de Gobierno, que no pudo realizarse al estar el centro cívico ocupado por un inusual despliegue policial. Desde muy temprano la policía se apostó frente a la sede gremial e inspeccionó el vehículo del gremio (*El Diario*, 12 de septiembre de 2001, p.6).

Hacia mediados de mes se aprobó, entre gallos y medianoche, en la cámara alta de la provincia, el proyecto del ejecutivo para pagar con bonos federales salarios a trabajadores activos y jubilados. En repudio a la medida, cientos de trabajadores, convocados por la Multisectorial, se movilizaron a Casa de Gobierno, y luego de encendidos y duros discursos en el acto, golpearon simbólicamente las puertas de la misma.

Los docentes de Agmer cerraron el mes con el sostenimiento de la retención de servicios de 2 horas por turno durante toda la semana y una movilización el 24, contra el retraso en el pago de los salarios, las medidas de ajuste de nación y provincia, esta última con el horizonte de pago de haberes con bonos. Para el día siguiente, se convocaba a asambleas radiales en distintos puntos estratégicos (plaza 1º de Mayo, inmediaciones de la Escuela Hogar, plaza San Agustín, Corrientes y Moreno, Escuela Magnasco y zona sur). El 26, se organizó una nueva movilización a Casa Gris (el modo en que se designa popularmente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos). El 27, asambleas por escuela y la semana se cerró con otra marcha (*El Diario*, 24 de septiembre de 2001, p.6). También se sumaron a la movilización del martes 25 junto a los principales sindicatos estatales en la Multisectorial y coincidieron, así, con la sesión de la Cámara de Diputados en la que se esperaba el tratamiento del proyecto de instrumentación de los bonos federales (“bofes”), que ya tenía media sanción de senadores. Finalmente, los bonos

fueron aprobados, entre naranjazos y huevazos contra las puertas y paredes de la Casa Gris.

En ese contexto de creciente radicalización del proceso conflictivo e intensificación de la movilización, los docentes de Agmer convocaron a un nuevo paro el 3 de octubre, en el marco de una semana con diferentes medidas de protesta como actos, movilizaciones, radio abierta, clases públicas, entre otras, junto a la comunidad y fuera del horario escolar. Se oponían, así, a las recientes medidas del gobierno que incluían la disposición del asueto administrativo, el diferimiento del pago de los salarios de agosto y septiembre para octubre y la eventual instrumentación de los bonos para el pago de los mismos. Con respecto al asueto:

Esta gravísima situación, que deja a la educación pública atada a las decisiones caprichosas de un gobierno que un día decide sin más cerrar el servicio educativo, es el corolario de una realidad que los trabajadores de la educación denunciábamos desde hace tiempo, con profesores que no concurren a los establecimientos por imposibilidad de costear el traslado; alumnos sin transporte para ir a la escuela y chicos que van sin comer (El Diario, 27 de septiembre de 2001, p.9).

Tal y como preveían los docentes, ante la profundización de la crisis, el asueto llevó a que muchos chicos se quedaran sin una comida, por lo que el comedor de la Escuela San Antonio María Gianelli, zona Anacleto Medina, contó con unos 300 chicos más de los que usualmente concurren por su plato de comida (El Diario, 28 de septiembre de 2001, p.8).

El paro finalmente se efectivizó el 4 para coincidir con la medida de Ctera (en reclamo al pago de salarios atrasados y a las cuotas adeudadas por el Fondo de Incentivo), una acción que contó a su vez con la adhesión de AMET (El Diario, 2 de octubre de 2001, p.9). Durante toda la semana, además, se programaron diversas actividades como actos, movilizaciones, radios abiertas, clases públicas, etc. (El Diario, 1 de octubre de 2001, p.6).

El paro docente se expresó con fuerza, con una adhesión del 80% de acuerdo a la conducción de Agmer. En Paraná y frente a Casa de Gobierno, el acto estuvo encabezado por la titular de Ctera Marta Maffei quien cuestionó el carácter “autoritario” del gobernador Montiel e instó a votar “contra el modelo” (El Diario, 5 de octubre de 2001, p.8). En la concurrida movilización a Casa de Gobierno convocada por Agmer y con la adhesión de AMET, también participaron, entre otros, estatales, profesionales de la salud, judiciales, empleados legislativos, universitarios y jubilados. Beatriz Montaldo, por su parte, cuestionó por igual a oficialistas y opositores:

Los oficialistas, por un lado, plantean que no tienen nada que ver con lo que pasa en el gobierno; y por el otro lado, algunos de la oposición intentan encaramarse en las luchas de los trabajadores (...) Tenemos memoria y sabemos quién es quién; no nos olvidamos de nadie, ni de (los exgobernadores Mario) Moine ni de (Jorge) Busti ni de (Sergio) Montiel. Para los trabajadores han sido exactamente lo mismo: todos privatizaron, todos apretaron, todos ajustaron, de eso no nos olvidamos. (El Diario, 5 de octubre de 2001, p.8)

El XCIX Congreso Extraordinario de Agmer dictaminó un nuevo paro para el 24 de octubre debido al atraso del gobierno en la liquidación de los haberes, fraccionamiento del medio aguinaldo y el pago en bonos, entre otros puntos. Se continuaba con las retenciones de dos horas por turno. El plan de lucha era: martes 9, asamblea por seccional; miércoles 10, asamblea por escuela; jueves, suspensión de dos horas y movilización. Se preveían dos movilizaciones más para el 17 y el 19 de octubre y nuevas jornadas de suspensión de dos horas para los días 22 y 23 del mismo mes como forma de preparar el paro del 24 (El Diario, 7 de octubre de 2001, p.7).

En la pequeña localidad de Colonia Avellaneda, docentes, alumnos, padres y vecinos de la Escuela N° 170, se movilizaron por las calles de la localidad y por la Ruta 18 (donde se encontraron con contingentes de vecinos y establecimientos de San Benito y Estación Parera) en repudio al ajuste, la crisis y en contra del pago de la deuda “que nosotros no contrajimos” (El Diario, 11 de octubre de 2001, p.14). La protesta se realizó fuera del horario de clases. Con presencia de miembros de Agmer, se realizó un pequeño acto de cierre.

El 14 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de medio término. En la provincia se produjo un amplio triunfo del peronismo y del “voto bronca” (blancos, nulos, impugnados y recurridos) que disputó el segundo lugar, casi 20%. Los resultados indicaron un duro revés para el oficialismo (el radicalismo y sus aliados en la Alianza, el Frente para un País Solidario -Frepaso-), que perdió más de 170 mil votos con relación a la elección de 1999. Con relación al “voto bronca”, desde Agmer sostuvieron que “por más desesperanza y bronca que juntemos, nuestro mensaje no elige el camino correcto cuando anula la herramienta de que disponemos para comenzar a cambiar algo” (Presencia N° 85, septiembre/octubre de 2001, p.2). Asimismo, denunciaron “la utilización que pretendió hacer el justicialismo de la representación de Agmer en la campaña electoral (Presencia N° 85, septiembre/octubre, p.5), por haber utilizado una imagen de la secretaria general Beatriz Montaldo en un spot publicitario.

Al día siguiente de las elecciones, se levantó la carpa docente en Chajarí, luego de 78 días de permanencia. “Cumplió un ciclo, aunque no los objetivos”,

señaló José Luis Panozzo, de Agmer. La decisión se justificó en el desgaste de los docentes, que debían sostener el acampe las 24 horas del día (El Diario, 17 de octubre de 2001, s.II, p.5).

El 18 de octubre, Agmer realizó una concentración en Paraná frente a la Dirección Departamental de Escuelas en reclamo del pago de los haberes adeudados de agosto y septiembre, el salario anual complementario (SAC) de activos y jubilados y el incentivo docente. También hubo retención de servicios de dos horas, y asambleas.

En Concordia, docentes autoconvocados (por fuera del gremio) decidieron, luego de una asamblea multitudinaria, realizar un paro de 48 horas el lunes 22 y el martes 23 (con presencia en el lugar de trabajo) y adherirse al paro del miércoles de Ctera. Manifestaron mucha bronca dado que argumentaban que los delegados gremiales de Agmer fueron los únicos que cobraron el medio aguinaldo (El Diario, 21 de octubre de 2001, p.6)

El día 23, los docentes en Agmer concluyeron su suspensión de dos horas por turno en Paraná con una marcha de antorchas. Al día siguiente, concretaron un paro de 24 horas, en el contexto del paro nacional de Ctera junto al resto de los gremios docentes (Sadop, AMET, UDA y la Asociación Gremial de Docentes Universitarios -AGDU-). La adhesión declarada fue del 84% y confluyeron en la movilización de la Multisectorial a Casa de Gobierno, donde se planteó la consigna “Fuera Montiel”.

Hacia fines del mes, en un nuevo Congreso Extraordinario de Agmer, se enduició el plan de lucha. Se preveían seis paros en tres semanas, de manera escalonada. La primera semana con cuatro días de retención de servicios de dos horas por turno y un paro el miércoles 31 de octubre (El Diario, 28 de octubre de 2001, p.6). La semana siguiente (5 al 9 de noviembre), tres días de retención y paro de 48 horas. La tercera semana (12 al 16 de noviembre) dos días de retención y paro de 72 horas. Las horas de retención de servicio se plantearon para realizar movilizaciones y/o difusión de la propuesta del Seguro de Empleo y Formación de la CTA9. Los reclamos: pago de salarios adeudados, en contra del fraccionamiento del aguinaldo, contra la implementación de los bonos y el Plan Aguinaldo¹⁰ y

9 El Seguro de Empleo y Formación de la CTA fue una propuesta que contemplaba la situación de 720 mil familias desocupadas, con un seguro que inicialmente definió un monto de 380 pesos mensuales, más 60 pesos de asignación mensual por hijo a todos los trabajadores estables, precarios, desocupados, etc.; con el objetivo de que ninguna familia se encuentre bajo la línea de la pobreza (Gusmerotti, 2003, p.7)

10 Ante la bancarrota del Estado provincial, el gobierno decidió fraccionar el pago del aguinaldo en seis cuotas. En un decreto del 6 de julio (dado a conocer un par de semanas después), se especificaba

exigir la remisión de los aportes retenidos de los sueldos de los trabajadores a las obras sociales.

El paro del 31 de octubre tuvo una adhesión del 85% (en Paraná, el 80%) (El Diario, 1 de noviembre de 2001, p.11). Se confluó en movilización con la Multi-sectorial con escraches a los bancos en Paraná.

En Concordia, por su parte, los docentes autoconvocados decidieron continuar con el estado de asamblea permanente en los lugares de trabajo sin asistencia de los alumnos hasta que se abonen los haberes de agosto, septiembre y octubre. A los 26 colegios autoconvocados se sumaron cinco más. Medidas similares se desarrollaron en los departamentos de Nogoyá, Federación y San Salvador (El Diario, 31 de octubre de 2001, s.II, p. 5).

En noviembre, la conflictividad docente se fue incrementando al calor de la agudización de la crisis. También se produjeron algunos incidentes y enfrentamientos en las movilizaciones de la multisectorial (hubo trabajadores detenidos). Tres escuelas técnicas debieron suspender sus clases ante la falta de docentes, debido a la masiva llegada de telegramas obreros, de acuerdo a lo que denunció AMET (El Diario, 3 de noviembre de 2001, p.9).

La seccional Concordia de Agmer, por su parte, anunció un paro de 36 horas con ayuno, en reclamo de los haberes atrasados de agosto, septiembre, aguinaldo y el Fonid. Convocó, a su vez, a la comunidad a una marcha hacia el Hipermercado Norte (El Diario, 4 de noviembre de 2001, s. II, p.7).

El paro de 48 horas. convocado por Agmer para los días 5 y 6 de noviembre), con adhesión de AMET, tuvo un 90% de acatamiento. En ese contexto, se denunció la existencia de más de 1.000 telegramas obreros enviados por docentes que no podían viajar a sus lugares de trabajo. Según Montaldo, 90 escuelas funcionaban a medias y 60 escuelas directamente no funcionaban (El Diario, 7 de noviembre de 2001, p.9).

También se movilizaron las escuelas privadas: miembros de Asociación de Establecimientos Privados de la Provincia de Entre Ríos (Aepeer) realizaron una marcha del silencio en apoyo a los docentes en su reclamo por el pago de haberes atrasados y en defensa de la educación (El Diario, 9 de noviembre de 2001, p.11).

Otro condimento que contribuyó al agravamiento de la situación social general de los entrerrianos en general, y los docentes en particular, fue la puesta en

que, cuando hubiese fondos disponibles, estos serían destinados para el pago de la primera cuota. Para vehicular este pago, se lanzó el "Plan Aguinaldo": lo abonado sería depositado en una tarjeta denominada Sidecreer ("Sistema de Crédito de Entre Ríos"), que podría utilizarse en comercios adheridos (que resultaron ser muy pocos).

circulación de los bonos federales (52 millones). Los docentes fueron los primeros trabajadores en recibirlos: como parte de pago de los haberes de septiembre se les pagó a 22.000 docentes quienes los recibieron “en disconformidad” (El Diario, 10 de noviembre de 2001, p.7).

A mediados de mes se inició el paro de 72 horas, con adhesión de Sadop y AMET, en reclamo del pago de haberes atrasados y en rechazo a la instrumentación de bonos federales para pagar salarios. Además de estos planteos al gobierno provincial, se sumó una demanda nacional: el mantenimiento del Fonid en el presupuesto 2002. En Paraná, se instaló una carpa en la plaza 1° de Mayo durante el paro, con un representante por cada seccional que realizaba un ayuno (El Diario, 14 de noviembre de 2001, p.11). El paro tuvo un acatamiento del 85% para Agmer y, en el caso de las escuelas técnicas, del 90% según AMET. La carpa contó con 12 ayunantes (El Diario, 15 de noviembre de 2001, p.9).

El segundo día de paro docente, además de la carpa de ayuno en la capital provincial, se acompañó de movilizaciones en localidades del interior como en Colón (El Diario, 16 de noviembre de 2001, p.7). En Santa Elena, por su parte, docentes realizaron un corte de la Ruta Nacional 12, decidido por asamblea. Sin embargo, fue poca la concurrencia: 34 docentes y tres desocupados dispuestos para cumplir la medida de fuerza. Frente a la asistencia de algunos docentes, empleados de comercio, jubilados, pensionados y trabajadores de la salud provenientes de la localidad vecina de La Paz lograron finalmente conformar un grupo de 80 personas aproximadamente que concretó la medida (El Diario, 16 de noviembre de 2001, s.II, p.5).

Finalmente, el tercer día de paro y carpa concluyó con una movilización de antorchas por la capital y el anuncio de un nuevo paro de 72 horas para la semana siguiente y suspensión de actividades de dos horas por turno los días lunes y viernes, más allá de los anuncios gubernamentales. Asimismo, se pidió por la emergencia social (El Diario, 17 de noviembre de 2001, p.11).

El paro de la semana siguiente, culminó el jueves en consonancia con la jornada nacional de lucha de la Ctera, con una movilización en Paraná a Casa de Gobierno, junto a la Multisectorial. Por otro lado, el CGE anunció el descuento de las jornadas de paro (El Diario, 20 de noviembre de 2001, p.11). A su vez, el gobierno anunció extender las clases hasta el 7 de diciembre, lo que concitó el rechazo de Agmer y AMET (UDA, en cambio, apoyó).

El paro docente tuvo un acatamiento del 80% a pesar de las amenazas de Argachá de aplicar descuentos por los días de paro y retenciones. Se decidió continuar el plan de lucha, con un paro de 48 horas para los días 26 y 27 de noviem-

bre y nuevas retenciones por dos horas para los días 28, 29 y 30. Para la semana del 3 al 7 de diciembre se convocó a otro paro de 48 horas para los días 5 y 6, y a retenciones de dos horas los días 3,4 y 7 (El Diario, 23 de noviembre de 2001, p.8).

El paro de 48 horas de la última semana de noviembre finalizó con un alto acatamiento, según Agmer. El mismo se planteó fundamentalmente por “falta de pago, ya que, si bien se han abonado los salarios de agosto y septiembre, en el caso de los docentes privados no han cobrado este último mes” mientras quienes sí percibieron sus haberes “se han encontrado con los descuentos por débitos automáticos y créditos de los bancos, que les han pagado, pero no han recibido nada” (El Diario, 27 de noviembre de 2001, p.9). Debido a la situación de los docentes de escuelas públicas de gestión privada, Sadop inició un paro de 48 horas.

Hacia la explosión de diciembre: saqueos y represión

El mes de diciembre comenzó con el anuncio del gobierno nacional de la implementación del tristemente célebre “corralito” bancario: a partir de entonces solo se podría retirar de los bancos \$250 por semana. Más allá del permanente estado de movilización de la Multisectorial, con la participación de Agmer en cada una de las acciones, los gremios docentes siguieron realizando medidas sectoriales hasta el final del ciclo lectivo.

AMET realizó un paro de 48 horas en repudio al pedido de listado de docentes que hicieron paro ante los pagos atrasados y en rechazo al pago fraccionado del SAC, la imposición del Plan Aguinaldo y pago en bonos (El Diario, 5 de diciembre de 2001, p.9).

Agmer y Sadop también pararon por 48 horas. Desde Sadop comunicaron que “si no existe cambio en la política que aplica (el Gobierno), no vamos a empezar las clases en 2002, hasta que garantice un presupuesto acorde con nuestros derechos y con las necesidades de todo el sector” (El Diario, 5 de diciembre de 2001, p.11).

En la movilización de la Multisectorial del 6, Adela Ramírez de Agmer criticó la pretensión gubernamental de ilegalizar las huelgas: “De qué legalidad habla este gobierno que ha violado todas y cada una de las normas constitucionales desde que asumió; que en dos años no ha hecho otra cosa que valerse de aprietes, ajustes y jueces amigos que lograron gracias a la renta vitalicia” (El Diario, 7 de diciembre de 2001, p.13).

Tras la primera semana de diciembre, la crisis en los municipios, debido al atraso en el pago de las coparticipaciones, se hizo insostenible. En algunas loca-

lidades se empezaron a formar comités de crisis en los cuales participó Agmer. Fue el caso de Santa Elena, que estuvo integrado por trece representantes de gremios locales como ATE, UPCN, Centro Comercial, Agmer, el sindicato municipal, desocupados y las distintas iglesias: Evangélica, Asamblea de Dios, Protestante, Evangelista y Católica. Su objetivo era encontrar, en conjunto, soluciones a la crisis económica y financiera.

La comisión se reunió con el ministro Carbó al que entregaron un petitorio que incluía, entre otros puntos, el pago de un mes de salario de los planes de emergencia ocupacional y el adelanto de la coparticipación por un monto de 90 mil pesos. En Santa Elena se adeudaban salarios desde octubre (El Diario, 8 de diciembre de 2001, s. II, p.5).

La Multisectorial continuó su accionar conflictivo y sumó a sus protestas a los comerciantes, crecientemente agobiados por los bonos: se veían forzados a aceptarlos como medios de pago ya que gran parte de los trabajadores los percibían, pero debían abonar las facturas de servicios en pesos. En ese sentido, hubo protestas frente a las empresas privatizadas y creció la demanda de “emergencia ya” (El Diario, 13 de diciembre de 2001, p.11).

Una vez finalizado el ciclo lectivo, desde la agrupación Tribuna Docente (opositora a la conducción de Agmer)¹¹ instaron a reforzar el activismo de cara al verano y que en cada escuela se conforme un comité de lucha juntamente con la comunidad para avanzar en un mayor grado de movilización, más masivo y dinámico. Plantearon una Asamblea Constituyente, soberana y dirigida por sectores del trabajo y la producción (El Diario, 13 de diciembre de 2001, p.9).

El 13 de diciembre, finalmente, se aprobó en el senado la emergencia social, por lo que se convirtió, así, en ley. Desde el PJ se objetó que el pago a los municipios no figurara entre las prioridades a la hora de asignar recursos (El Diario, 14 de diciembre de 2001, p.6).

El 15 de diciembre estallaron los saqueos en Concordia, que luego se extendieron a Concepción del Uruguay para, finalmente, producirse en Paraná. En la represión a los mismos se produjeron tres víctimas fatales en la capital provincial: Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Carlos Rodríguez.

11 Agmer, para 2001, se encontraba conducido a nivel provincial por la lista Celeste. En la seccional Paraná, conducía la lista Verde “Memoria y Lucha”. En ambos casos, se trataba de listas únicas. Recién promediando la década del 2000, se conformó la lista Rojo y Negro “1° de Mayo” a nivel provincial que compitió con la Celeste. La misma accedió a la conducción de la Comisión Directiva Central (CDC) en el año 2009. El pequeño núcleo en Paraná de Tribuna Docente (PO) no participaba de ninguna lista.

El 19 y 20 de diciembre, como en todo el país, las movilizaciones populares desafiaron el estado de sitio. El 19, docentes de la seccional Paraná de Agmer junto a no docentes agremiados en ATE, tomaron el CGE. La misma se produjo sin resistencia, en el medio del caos generalizado que reinaba en la ciudad y en la provincia:

Estábamos en una situación de tensión muy grande, con mucha bronca, con mucho dolor porque salida no encontrábamos, respuesta tampoco. Bueno, empezamos a subir las escaleras del Consejo de Educación, cuando nos descuidamos estábamos en el cuarto piso, no había nadie, resistencia ninguna. Y bueno, nos sentamos en la presidencia del CGE y ahí estábamos en la presidencia del CGE, yo estuve en la presidencia del CGE, sentada. (Entrevista a Mabel Masutti, 29/6/21)

El 19 de diciembre nosotros tomamos el Consejo. Argachá no estaba, se fugó. No sé dónde estaba. Y bueno, nosotros pasamos la noche ahí y al otro día veíamos por la televisión los saqueos (...) desde el cuarto piso. (Entrevista a César Baudino, 28/11/24)

En Paraná, el 20, la Multisectorial realizó un acto en la plaza 1° de Mayo y un corte en la intersección de las calles Urquiza y Monte Caseros. Por la tarde, mientras la represión se intensificaba en los barrios y luego de un acto en la puerta de la sede de ATE, muchos integrantes de la multisectorial marcharon hacia la Casa de Gobierno en repudio al accionar del gobierno. Un pequeño grupo colocó una pila de neumáticos sobre la puerta de acceso principal y la prendieron fuego. No demoró en expandirse el humo al interior del recinto y la tensión en la explanada. La policía reprimió con gases lacrimógenos, al tiempo que intentaba controlar el fuego y los manifestantes se dispersaron en varias direcciones (algunos se resguardaron en la Iglesia San Miguel). Según versiones extraoficiales, algunos funcionarios que se encontraban al interior de la Casa de Gobierno comenzaron a organizar un operativo de seguridad armada para resguardar su integridad y la del edificio en caso de que los manifestantes lograsen ingresar. Debieron intervenir los Bomberos Zapadores para apagar el incendio y limpiar paredes, pisos y la puerta, ennegrecidos por el hollín mientras se desprendían algunos pedazos de yeso y baldosas de la entrada.

Tras la renuncia de De La Rúa, y la asunción de Adolfo Rodríguez Saá (PJ) como nuevo presidente, las agrupaciones organizadas en el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), la gran apuesta de Agmer para diciembre, emitieron el documento "Ningún hogar pobre en la Argentina. En Entre Ríos: Urgencia en la acción" que fue dado a conocer en una conferencia de prensa en la sede de Agmer. En dicho documento se proponía la promulgación de una Ley de Emergencia Social que

priorizara salarios, haberes previsionales, aportes y contribuciones al Instituto de la Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper), deudas con proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios, remesas a los municipios.

El documento fue entregado a un grupo de legisladores. A su vez, se proponía que las cámaras legislativas se declarasen en estado de sesión permanente y que realizaran una convocatoria a todos los sectores sociales a conformar un Comité de Crisis provincial al que deberían integrarse activamente también los poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales.

Atento a la legitimidad de los tres millones de votos a la consulta del Frenapo, y a la “ceguera puesta de manifiesto por el gobernador” que no alentaba “a esperanza alguna de que cambie su actitud”, manifestaban que “debe ser la Legislatura entrerriana la que asuma sin dilaciones la conducción política de la crisis entrerriana” (El Diario, 22 de diciembre de 2001, p.10).

Más allá del recambio presidencial, la crisis continuó y los docentes siguieron con más de dos meses sin cobrar. En ese contexto, Agmer repudió el retraso en los pagos de salarios: les debían 20% de septiembre (gracias a un empréstito del Banco de Entre Ríos el gobierno había pagado el 80%), octubre y noviembre. Para Montaldo se trataba de “un claro ejemplo de insensibilidad de parte del gobierno, ya que obliga a la mayoría de los trabajadores, con los maestros incluidos, a pasar la Navidad sin un centavo en el bolsillo” (El Diario, 23 de diciembre de 2001, p. 6). AMET también salió a exigir el pago de sueldos y señaló, mediante un comunicado, que los saqueos habían surgido “de políticas instrumentadas contra los derechos de los trabajadores” (El Diario, 23 de diciembre de 2001, p.11).

Luego de la navidad, finalmente, se reunió el Comité de Crisis al que se integraron tanto la Multisectorial como el Frenapo, en acuerdo con el ministro de Acción Social, Rubén Villaverde. El año de conflictividad docente concluyó con malestar ya que, a pesar de los anuncios oficiales sobre la actualización de los tramos salariales adeudados, los mismos no se cumplieron. Tras largas colas frente a los bancos, muchos se fueron con las manos vacías y esto se consideraba como una “nueva burla de parte de las autoridades” (El Diario, 28 de diciembre de 2001). Por lo tanto, Agmer anunció una presentación al contador del CGE al respecto y convocó para el 28 a una Asamblea General Extraordinaria a efectos de determinar los pasos a seguir.

De lo sectorial a lo multisectorial. Acción y organización docente en 2001.

Desde una perspectiva teórica, concebimos a los docentes como un colectivo de trabajadores intelectuales que, en el plano de las relaciones sociales objetivas, se

presenta como un grupo masivamente asalariado con un peso importante, y que, en el plano de las relaciones políticas, se expresa sindicalmente –es decir como trabajadores asalariados– en sus organizaciones y luchas (Donaire, 2012, 26).

Esto implica considerar a los trabajadores de la educación como fracción de la clase obrera que forma parte del entramado de la lucha de clases (Iñigo Carrera, 2011) en confrontación fundamentalmente con el Estado provincial, luego de la descentralización administrativa que implicó la reforma del Estado en los años noventa. En tanto trabajo improductivo, es decir, desde una perspectiva marxista, trabajo que no valoriza capital, la enseñanza puede considerarse como una forma transicional de subsunción del trabajo en el Estado, como servicio, sujeta a una relación salarial (Martínez Bonafé, 1999; González, 2014).

En el proceso conflictivo desarrollado durante el año 2001 en Entre Ríos, como pudimos evidenciar en el apartado anterior, los docentes entrerrianos desplegaron un variado repertorio de acciones y diversos tipos de organización para llevar a cabo sus demandas.

Estas demandas fueron variadas. En el primer semestre, preponderaron reclamos sectoriales como la lucha por los días descontados por huelga, el pago del Fonid y contra la reforma del Estatuto Docente, así como cuestiones puntuales contra el gobierno como la responsabilidad docente en días feriados patrios o el conflicto de la Uader. En el caso de la educación técnica también hubo reclamos contra el cese de cargos. Hacia el segundo semestre, en cambio, las demandas centrales refirieron al pago de salarios atrasados y en contra del fraccionamiento del aguinaldo y el pago en bonos. En estas últimas demandas, junto a la resistencia al plan de ajuste contenido en el llamado “Déficit Cero”, los docentes confluyeron con otros sectores estatales (centralmente ATE y AJER) afectados por la misma medida, lo que trascendía lo corporativo.

Desde el punto de vista organizativo, la principal forma que utilizaron los docentes fueron sus sindicatos, fundamentalmente para sus demandas económico-corporativas. El sindicato que motorizó las acciones fue el mayoritario, Agmer, aunque coordinó sus acciones con el resto de los sindicatos docentes. Con respecto a la relación intersindical docente es interesante el planteo de un dirigente de Agmer Uruguay (Concepción del Uruguay):

[Era] una relación de coordinación ‘cuando las papas quemaban’, cuando la conflictividad era altamente fuerte, pero era una relación tensa en las etapas más calmas (...) en cada momento de alta conflictividad en general se acordó, se acordaron estrategias comunes, etc., etc. Cuando bajaba esa conflictividad (...) lógicamente reaparecían algunas tensiones, ¿no? Porque

estábamos disputando un mismo territorio. (Entrevista a Alejandro Bernasconi, 3/5/23)

Siguiendo a Schmalz (2018) y su sistematización de los aportes de las teorías de los recursos de poder sindical, podríamos preguntarnos por los recursos de los que se valieron los sindicatos docentes entrerrianos en la movilización para tratar de defender sus intereses de manera exitosa.

En primer lugar, con relación al **poder estructural**: ¿puede hablarse de poder estructural de los docentes? Si bien, al no ser parte directa del proceso de valorización del capital (trabajo productivo) y, por tanto, no afectar con sus acciones de manera directa el proceso de generación (en la producción) y de realización (en la circulación) de la plusvalía, no cuentan con *poder de producción* (derivado de la posición ocupada en el proceso productivo), sus acciones sí tienen la posibilidad de, frente a un paro de actividades, generar trastornos en otros sectores (incluso trabajadores) que fuerzan a los empleadores (en este caso, el Estado) a tratar de solucionar el conflicto para regularizar las tareas lo antes posible.

Al tener menores de edad a su cuidado de manera diaria durante una determinada cantidad de horas e, incluso, cumplir tareas de alimentación en comedores escolares que, especialmente en épocas de crisis, adquieren una gran importancia en los sectores más empobrecidos, consideramos que los docentes cuentan con *poder de reproducción*. Este poder, opera de manera contradictoria, ya que “ocasionan solo costos parciales a los empleadores privados” (Schmalz, 2018, p.23) (por ejemplo, generando ausentismo de trabajadores que no cuentan con el cuidado de sus hijos durante la jornada escolar) y, al mismo tiempo, por afectar también a otros trabajadores, deben convencer a estos de la legitimidad de su accionar. Esta situación, en el caso de los docentes, se ve agravada por tratarse una actividad fuertemente feminizada y estando las tareas de cuidado mayoritariamente a cargo de mujeres¹², con la que la doble condición de docente-madre, puede generar una contradicción a la hora de tomar medidas de fuerza.

El poder asociativo, por su parte, contribuye, en parte, a compensar la falta de poder estructural. Este poder, que resulta de la “asociación en organizaciones obreras colectivas políticas o sindicales” (Brinkmann y Nachtwey, 2010, p.25), fue muy importante en el despliegue de las acciones de los docentes. El alto acatamiento de los paros y la masiva participación de los afiliados tanto en las orga-

12 De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Docente encargada por Ctera y realizada por la Consultora Equis, entre septiembre y noviembre del año 2000, en Entre Ríos, el 78% de los trabajadores de la educación eran mujeres, de entre 25 y 45 años. A su vez, el 40% tenía entre 1 y 2 menores a cargo y el 14,5% entre 3 y 4 menores a cargo (*Presencia* N° 81, abril de 2001, p.12).

nizaciones como en los mecanismos de toma de decisión, a partir de las permanentes asambleas en el lugar de trabajo y los congresos sindicales, dan cuenta de ello. Las redes sindicales asociativas, con la Ctera (asociación de segundo orden) y CTA (tercer orden), fueron fundamentales a su vez en el soporte de las acciones.

Con respecto al **poder institucional**, que nos sirve para comprender cómo utilizar derechos consagrados legalmente, cristalización jurídica de relaciones de fuerza resultantes de luchas pasadas, en beneficio de los trabajadores, hubo una puja con el gobierno provincial por defender centralmente dos: el derecho a huelga (cuestionado permanente por el gobierno) y la defensa del Estatuto docente (que regula las condiciones de trabajo docente). Los descuentos ante las medidas de fuerza, así como la amenaza de penalizarlas o directamente limitarlas, fueron denunciados por los sindicatos docentes como un ataque al derecho de huelga. También se denunciaron como discriminatorias e ilegales los intentos del gobierno de obligar a los docentes a participar en los actos oficiales de los días patrios, al considerarse inconstitucional la obligatoriedad de trabajar en feriados no laborales.

Finalmente, con respecto al **poder social**, los docentes fueron capaces de establecer alianzas con otros sectores sociales, que incluso tomaron forma permanente en la organización Multisectorial. El creciente descrédito del gobierno provincial, al igual que el nacional, en su incapacidad de garantizar la reproducción social de cada vez mayor cantidad de sectores sociales a la par del *crescendo* de la crisis que encontró su erupción volcánica en diciembre, generó consenso de las demandas y los métodos de lucha en el rechazo al ajuste y al “modelo” (eufemismo para dar cuenta del neoliberalismo que mostraba signos de agotamiento). Medidas tan impopulares como el retraso en los salarios, el pago de los mismos en bonos o el fraccionamiento en cinco del aguinaldo, concitaron legitimidad en el discurso articulado de los docentes con otros sectores en repudio a las medidas gubernamentales que contribuían a la degradación de los derechos y condiciones de vida que debían ser garantizados de acuerdo a la promesa democrática de 1983. A su vez, los docentes y la educación pública, habían adquirido una fuerte potencia simbólica de resistencia con la experiencia de la carpa blanca, recurso que fue utilizado por los docentes, tanto en medidas efectivas como amenaza permanente.

Otra forma de organización que surgió, alternativa a la canalizada por la organización sindical, fue la de los docentes autoconvocados. Estas experiencias se dieron en el norte de la provincia, en Concordia y Chajarí. Con respecto al

caso concordiense, donde los autoconvocados¹³ tuvieron mayor relevancia, un docente nos comentó:

[L]a conducción del sindicato comenzó a distanciarse de manera abismal de los intereses de los trabajadores de la educación y del mandato de las bases. La falta de respuestas, el desconocimiento del mandato que exigía medidas de fuerza cada vez más duras (los congresales de Concordia solían votar en contra del mandato de las bases) tuvo como respuesta el surgimiento del Movimiento de Autoconvocados, cuya principal herramienta de lucha era el “Telegrama Obrero” un vericuetto legal para materializar las medidas de fuerza que el sindicato no ejecutaba. (Entrevista a Juan Menoni, 31/1/24)

Sin embargo, si bien existieron autoconvocatorias, en general no hubo desborde de bases a las conducciones sindicales como en otros procesos contemporáneos, como el de Bahía Blanca (Tejada Gómez y Becher, 2022), donde las bases tuvieron mayor protagonismo y la escuela se transformó en un espacio de organización de la comunidad.

Cuando los reclamos se orientaron hacia las medidas de ajuste en general, contra los salarios adeudados, el fraccionamiento del aguinaldo y el pago en bonos, la forma organizacional que tendió a primar fue la Multisectorial, expresión cristalizada de la fuerza social (Marín, 2009) que se fue constituyendo en la lucha contra el ajuste.

En el caso de los conflictos en las escuelas privadas confesionales, que se agudizaron desde el mes de septiembre ante la falta de pagos, una característica es que sus movilizaciones congregaron al conjunto de la comunidad educativa escolar (directivos, docentes, alumnos y familias).

Con respecto a las formas de lucha, las principales fueron el paro y la movilización. Los paros se determinaron de manera provincial o bien hubo adhesión a los decididos en instancias nacionales, tanto a los específicamente docentes (Ctera) como a los generales (CTA). También hubo numerosas retenciones de servicios, como manera de sostenimiento de los planes de lucha, resueltos en asambleas y congresos provinciales.

13 De las autoconvocatorias concordienses participó un movimiento muy heterogéneo políticamente, pero los militantes partidarios que participaban no se identificaban como tales. Algunos de los militantes de aquella experiencia fundaron al año siguiente la lista Verde (no confundir con la Verde “Memoria y Lucha” de Paraná, aunque posteriormente ambas confluirían en la conformación de la lista Rojo y Negro a nivel provincial).

En general, las movilizaciones se coordinaron con otros sectores. En el caso específico de los docentes, predominaron las concentraciones en la sede gremial para -desde allí- movilizarse hacia la Casa de Gobierno.

También formó parte del repertorio de acción de los docentes el acampe a través de una emblemática figura: la carpa. Este recurso apareció en tanto amenaza y también como medida efectiva, como fue en el caso de la carpa docente de Chajarí (a instancia autoconvocada) o en la carpa de ayuno en Paraná en el mes de noviembre (a instancias del sindicato).

En las jornadas de diciembre se efectuó una toma del CGE, sobre las que es interesante detenerse un momento. La misma pudo ser rastreada a través de las entrevistas en profundidad, ya que no aparece registrada en la fuente hemerográfica. Al respecto, la secretaria general de Agmer sostuvo que “no fue algo que estuviera planificado por la gente del sindicato” y “no fueron de la conducción provincial” (Entrevista a Beatriz Montaldo, 24/10/19). Esta última afirmación, diferente a la primera, da cuenta de la posibilidad de que pudiese haber sido planificado por gente de la seccional Paraná, opositora a la conducción provincial. Esto último coincide con lo expresado por un dirigente de la CCC, integrante de la Multisectorial, quien sostuvo que “estaba la toma del Consejo de la Educación por parte de la seccional de Agmer Paraná, con compañeros no docentes de ATE” (Entrevista a Alejandro Sologuren, 6/7/19).

Otro testimonio, de un delegado opositor planteó:

En esa toma no estuvo directamente implicado Agmer, sino que fue una movida más de los compañeros de ATE. (...) La tomábamos como un programa de la multisectorial. Entonces, por supuesto, que lo apoyábamos y estábamos ahí digamos. (...) los trabajadores docentes que estuvimos estábamos por ser militantes más de la multisectorial que del sindicato docente. Porque (...) la conducción de Agmer era muy remisa de ir a la confrontación directa. Mucha desconfianza con Massarotti¹⁴. (...). Entonces esa toma del CGE fue más bien de los compañeros delegados de ATE que lo plantearon

¹⁴ Edgardo Massarotti era el secretario general de ATE en Entre Ríos en 2001. Desde la agrupación “Unidad”, incorporada a la lista de la Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ANUSATE), ganó las elecciones de 1985, derrotando al oficialismo, que había estado ligado a la última dictadura. A partir de allí fue secretario general (alternando como secretario general adjunto) hasta 2003, cuando dejó la conducción del gremio. Fue el impulsor y principal referente de la Multisectorial, desde la cual confrontó duramente contra el gobierno de Montiel. A raíz de los hechos del 20 de diciembre de 2001, fue enjuiciado por la quema de la puerta de la Casa de Gobierno, causa de la cual fue absuelto en 2007.

en la multisectorial y la multisectorial les da pie. (Entrevista a Andrés Borgetto, 2/1/19).

Otra docente, remarcó que quiénes tomaron el CGE “éramos docentes”, aunque destacó el carácter espontáneo de la acción.

Creo, si no me equivoco, estábamos en asamblea o habíamos ido al *hall* del Consejo de Educación y empezamos a subir la escalera (...) y tomamos el CGE. Quizás en alguien estuvo instalado, (...) pero nosotros terminamos tomando el Consejo de Educación en el cuarto piso, sin ninguna autoridad, porque no había nadie, el Consejo estaba desalojado totalmente de toda autoridad política gubernamental. O sea, éramos todo nosotros. (Entrevista a Mabel Masutti, 29/6/21)

Lo que queda claro en este último testimonio es que una acción de semejante envergadura se vio facilitada por la oportunidad política (Tarrow, 1997): la disposición de las fuerzas represivas en los barrios frente a los saqueos y concentrada la atención política en el accionar de la Multisectorial en la Casa de Gobierno abrió una brecha para la irrupción de esta acción que incluso pasó desapercibida para los medios periodísticos en el marco de la convulsión social que se vivía. La posibilidad de dicha acción se abrió ante la situación de que “no había nadie” y el sector se encontraba “desalojado de toda autoridad política”: “Fue una cosa extraordinaria que no se da siempre” (Entrevista a Cesar Baudino, 28/12/24)

Las jornadas de diciembre que culminaron con el gobierno de De La Rúa e hirieron de muerte a la convertibilidad, sin dudas tomaron por sorpresa a la conducción de Agmer. Mientras ardía en llamas la puerta de la Casa de Gobierno, los saqueos conmocionaban la provincia y la represión policial cobraba sus víctimas, la estrategia del gremio docente mayoritario había estado en otro lugar, lejos de la confrontación directa:

El Frenapo, nuestro plan era ese (...) Todo noviembre, trabajamos con el frente contra la pobreza, el hecho político... nadie pensó que... ya se terminaba el año... Ya era 14 de diciembre, ¿qué iba a pasar ya? La escuela cerraba, nunca pensamos que íbamos a tener la ida del presidente días después. Porque fue el 20. Es decir, el plan era el Frenapo, trabajamos para el Frenapo todo, desde julio empezamos a trabajar para el Frente para la Pobreza (...) trabajar para ese voto que decíamos que era el voto verdadero hablando del otro voto, que era un voto de la traición porque la política... Nuestros políticos no respondían después al programa que habían planteado. Y después terminó en lo que terminó (Entrevista a Beatriz Montaldo, 24/10/19).

A modo de cierre

En este trabajo se reconstruyó el proceso de conflictividad docente durante 2001 en Entre Ríos, en el marco de una crisis orgánica en la cual los docentes, mediante sus organizaciones y constituidos como una fuerza social junto a otros sectores, confrontaron con el gobierno provincial.

Pudimos ver, de acuerdo a las fuentes consultadas, que los docentes presentaron un amplio abanico de demandas, que fueron desde específicas del sector a otras que los aunaron con otras fracciones de la clase trabajadora. En general, hacia el segundo semestre, con la profundización de la crisis, estas se orientaron hacia el pago de salarios sin atrasos, contra el fraccionamiento del aguinaldo y del pago en bonos. En general, durante todo el año hubo un alto grado de coordinación con otros sectores, sea de manera intersindical docente como a nivel multisectorial. Hacia el segundo semestre, con la profundización de la crisis, los reclamos multisectoriales tomaron mayor protagonismo y continuidad. Como en este trabajo nos centramos en la conflictividad docente, no hemos dado cuenta de todas las movilizaciones convocadas por la multisectorial en su lucha contra el ajuste, si bien los trabajadores de la educación participaron de la misma.

La forma de organización preponderante fue la sindical y, a través de esta, en la multisectorial, sobre todo en el segundo semestre cuando la crisis puso en jaque la reproducción social de cada vez mayor cantidad de sectores. Sin embargo, no faltaron autoconvocatorias, como en el caso de Concordia o Chajarí. A su vez, vimos que los sindicatos docentes, y en particular Agmer, se valieron de distintos recursos de poder para movilizar sus acciones y tratar de realizar sus intereses.

Con respecto a las formas de lucha, fueron el paro y la movilización las más utilizadas, junto a las retenciones de servicios. Los planes de lucha, tendieron a utilizar estas medidas de manera escalonada. En el caso de las movilizaciones, se confluó con otros sectores, a instancias de la Multisectorial. También existió el recurso de la carpa docente como medida con fuerte importancia simbólica en el sector.

En los días álgidos de diciembre, se produjo una toma, habilitada por la falta de regulación social y represiva del gobierno, desbordado frente a los saqueos y la situación caótica de conflictividad. Sin dudas, como evidencian las fuentes aquí consultadas, el estallido de diciembre tomó por sorpresa a las conducciones sindicales docentes, en especial a Agmer, cuya estrategia estaba orientada en función de la consulta del Frenapo planificada de antemano para dichos días y que luego de los acontecimientos de diciembre de 2002 parecían fuera de tiempo político.

El presente trabajo, como se mencionó en la introducción, es una primera aproximación al tema, de allí a su carácter necesariamente preliminar y fundamentalmente descriptivo. Se propone ser profundizado en futuras aproximaciones, e incorporar, para ello, nuevas fuentes (tanto documentales como orales).

Referencias bibliográficas

- Carrizo, G. (2012). Discurso, neoliberalismo y educación. La precarización laboral de los docentes: Revisando los 90. En *Intersticios* (Vol. 6 N° 1), 193-202
- Catelotti, K. y Medina, N. (2019). Los sindicatos docentes entrerrianos y su posicionamiento frente a las tensiones, alineamientos y estrategias de la CGT a nivel nacional. En *XVII Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia*. Universidad Nacional de Catamarca.
- Cotarelo, M.C. (2016). *Argentina (1993-2010). El proceso de formación de una fuerza social*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Donaire, R. (2012). *Los docentes en el siglo XXI. ¿Empobrecidos o proletarizados?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- González, H. (2014). *Transformar el trabajo docente para transformar la escuela*. En *Anuario del Instituto de Investigaciones y Estadísticas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos* (Año 1 N°1). 71-92.
- Gramsci, A. (2003). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Gusmerotti, L. (2003). La CTA: El Frente Nacional Contra La Pobreza y la Consulta Popular. Una aproximación a través del estudio de caso de la Regional La Plata, Berisso y Ensenada. En *III Jornadas de Sociología de la UNLP*.
- Iñigo Carrera, N. y Donaire, R. (2002). ¿Qué interés se manifiesta en las centrales sindicales argentinas? En *PIMSA. Documentos y publicaciones 2002*. 133-192.
- Jaimovich, A.; Migliavacca, A.; Pasmanik, Y. y Safocardá, F. (2004). *Reformas neoliberales, condiciones laborales y estatutos docentes*. Buenos Aires: Centro Cultural de Cooperación.
- Lévesque, C. y Murray, G. (2011). Entender el poder sindical. Recursos y capacidades para la renovación del poder sindical. En *Legitimidad y poder para la renovación sindical*. Bilbao: Manu Robles y Arangiz Institutua. 3-23.
- Marín, J. C. (2009). *Leyendo a Clausewitz*. Cuaderno 8. Buenos Aires: Picaso.
- Martínez Bonafé, J. (1999). *Trabajar en la escuela. Profesorado y reformas en el umbral del siglo XXI*. Madrid: Miño y Dávila Editores

- Migliavacca, A. (2011). *La protesta docente en la década de 1990. Experiencias de organización sindical en la provincia de Buenos Aires*. Tesis de Maestría en Política y Gestión de la Educación. Luján: Universidad Nacional de Luján
- Saforcada F. (2012). Las leyes de educación después de los años 90: de la hegemonía neoliberal al post consenso de Washington. Persistencias, sincretismos y transformaciones. En Feldfeber, M. y Gluz, N. (coords.), *Las políticas educativas después de los 90. Regulaciones, actores y procesos*. Buenos Aires: Clacso.
- Sautú, R. (2011). *El análisis de las clases sociales. Teorías y metodologías*. Buenos Aires: Luxemburg.
- Schmalz, S. (2018). Los recursos de poder para la transformación sindical. En *Nueva Sociedad Especial Sindicatos en Transformación*. 20-41.
- Tálamo, F. y Rozados, M. (2017). El conflicto docente en Entre Ríos: notas sobre la experiencia de la lucha sindical en el marco de la huelga del año 2003. En *Anuario del Instituto de Investigaciones y Estadísticas de AGMER 2017*. 05-13
- Tálamo, F.; Rozados, M. y De Rosa, N. (2019). Experiencias de resistencia y organización docente en la provincia de Entre Ríos en el contexto de la última dictadura. En Tálamo, F. y Rozados, M. (Comps). *Política educativa, sindicalismo y trabajo docente*. Paraná: Agmer.
- Tarrow, S. (1997). *Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el Estado moderno*. Madrid: Alianza.
- Tejada Gómez, M. y Becher, P. (2022). Conflictividad y organización sindical docente: el caso del Escuelazo en Bahía Blanca (2001). En *Crítica y Resistencias* (N° 14). 183-203.